

VIII FORO DE LA DEMOCRACIA LATINOAMERICANA
“Desafíos de las elecciones en tiempos de cambio: un panorama latinoamericano”
11, 12 y 13 de octubre de 2017, Palacio de Minería

La llegada y aumento de los sistemas democráticos en el mundo desde el último tercio del siglo pasado a la fecha ha hecho muy compleja la gobernabilidad de la democracia. Con el movimiento mundial para transitar hacia regímenes democráticos, dado el envejecimiento y agotamiento de otras formas de gobierno, la mayoría de las transiciones tuvo como eje del cambio el tema electoral. Se requería un nuevo pacto político que construyera una serie de disposiciones legales las cuales debían ser consensadas entre las partes que se disputaban el poder y la creación de organismos o comisiones electorales independientes. Para facilitar el cambio político se puso un gran esfuerzo en las elecciones libres y transparentes para dotar de una legitimidad de la que antes carecían los representantes políticos.

La evolución política en clave democrática ha traído consigo nuevos actores, nuevos procesos y nuevas demandas. Desde la perspectiva electoral y para reforzar la legitimidad democrática de las elecciones han aparecido una serie de reformas electorales para ampliar y fortalecer los sistemas de representación. Dan cuenta de ello las candidaturas independientes, los mecanismos de supervisión de los recursos de los partidos y candidatos, el uso de la tecnología para procesar los resultados electorales y la aparición de las redes sociales en las campañas políticas entre otros.

En su obra *La democracia en América* de 1855, Alexis de Tocqueville señala que la democracia, antes que un régimen, es una forma de vida que supone valores compartidos y condiciones sociales de igualdad. Retomando esa idea, el concepto de democracia como forma de vida tiene más relevancia que nunca. Hoy día, las democracias electorales en el mundo, y en particular en América Latina, están íntimamente relacionadas con una serie de factores que antes no eran definitivos. Así, las nuevas tecnologías, el uso del internet, y los medios de comunicación forman parte de la vida cotidiana de los ciudadanos, y es a través de ellos que la ciudadanía participa políticamente, genera información, decide y contribuye a la sociedad.

Las nuevas tecnologías han dado lugar a una nueva concepción de la participación política, y han modificado la manera de hacer política en el mundo. Las nuevas tecnologías de la comunicación, en particular las redes sociales, y las distintas herramientas en internet – utilizadas por casi el 50% de la población mundial- han abierto al ciudadano la posibilidad de acercarse a sus representantes, interactuar con otros ciudadanos, tener injerencia pública y movilizar a grandes grupos de personas con fines políticos. Sin embargo, las nuevas tecnologías también han traído consigo la desinformación y con ella, un mayor desencanto con la democracia.

Dentro de las nuevas demandas y procesos desde la década de los noventa, destacan las demandas por la protección y respeto de los derechos político-electorales de las minorías. Derechos que son parte inherente de la personalidad política de todos los ciudadanos, y que continúan representando un reto para democracias en América Latina. Los pueblos indígenas y las minorías étnicas continúan siendo de los grupos más vulnerables en

las democracias latinoamericanas, y cuya inclusión en la vida política resulta fundamental para superar efectivamente la desigualdad histórica y discriminación.

Por su parte, en un contexto político en el que más de un cuarto de la población de América Latina tiene entre 15 y 29 años de edad, los jóvenes sufren de manera importante las consecuencias de los estilos de desarrollo excluyentes vigentes en casi todos nuestros países, quienes a su vez miran con gran recelo a las clases dirigentes, rehúyen a la participación electoral y están en primera fila en las protestas sociales y políticas; sin embargo, también carecen de espacios que permitan impulsar políticas públicas que procuren mejorar su calidad de vida y oportunidades que impulsen su activo protagonismo social y político.

Existe una clara sub representación de la población joven en el aparato estatal, lo cual demuestra una carencia importante tanto en las oportunidades que se les brinda a los jóvenes, como en la voluntad de las esferas políticas de permitir innovación, cambio e inclusión. Jóvenes de entre 15 y 25 años representan un quinto de la población mundial, pero tienen una influencia muy limitada en las instituciones políticas nacionales. Si todos los sectores de la ciudadanía, incluyendo a las minorías étnicas, culturales y demográficas, no se apropiaran de los asuntos públicos de sus países, y tienen la oportunidad de involucrarse a cabalidad en los mismos, no será posible consolidar una verdadera cultura democrática.

Las contiendas electorales en el continente han sufrido una clara evolución y perfeccionamiento que han permitido que las democracias se consoliden y fortalezcan. Sin embargo, continúan existiendo prácticas que menoscaban los procesos democráticos, y que ponen en riesgo la legitimidad de los mismos. En este sentido, destaca la violencia política contra las mujeres como un medio por el cual se obstaculiza o interfiere con sus derechos políticos y, en consecuencia, los procesos electorales son anulados a través de la intimidación y la coerción.

El fenómeno de la violencia política es uno que permea en todos los niveles de la vida pública en nuestros países y, como dice Hannah Arendt, nadie ha examinado lo suficiente en cuanto al papel que desempeña en los asuntos humanos, a pesar de resultar completamente obvio. La violencia política que sufren las ciudadanas latinoamericanas, así como las candidatas a algún puesto político y las funcionarias electas, continúa siendo una constante y un reflejo de que la exclusión, discriminación e insuficiencia está presente tanto a nivel institucional, como a nivel cultural, y que si no es estudiado y combatido a cabalidad, nunca se podrá hablar de una democracia madura, consolidada y fuerte.

Otro de los factores que determina la calidad de democracia de los países, y que contribuye a fortalecer las reglas democráticas de un régimen, es la aceptabilidad de la derrota en los comicios electorales, y la legitimidad que brindan los organismos electorales a los mismos. Los resultados electorales, y su aceptación por parte de todos los actores involucrados en la contienda, es una de las expresiones más fehacientes de que existe certeza y confianza en las instituciones electorales. El Latinobarómetro indica que en 2015, las instituciones electorales en

la región gozaban únicamente de un 44% de nivel de confianza, por lo que la absoluta imparcialidad, objetividad y transparencia de los procesos es un requerimiento indispensable para alcanzar la credibilidad en los resultados electorales y de los organismos que los administran, y con estos, la consolidación de la democracia.

Adam Przeworski establece que la premisa que conecta a la democracia con la representación, es que si las elecciones son libremente disputadas, si la participación es universal, y si los ciudadanos gozan de libertades políticas, entonces los gobiernos actuarán en el mejor interés de la población. Sin embargo, quizás el componente que mayor cuestionamiento tiene la democracia y provoca el aumento del desencanto es la efectividad de la democracia en su ejercicio; es decir, la gobernabilidad democrática después de las elecciones.

El malestar con las deficiencias de la democracia no es nuevo, ni propio de un país o una región. El desencanto con la democracia se ha agudizado conforme crece la economía, aumenta la diversidad y composición social, se globalizan las relaciones internacionales, crecen las demandas sociales, entre otros. En América Latina, lo anterior se da en un contexto económico-social marcado por la realidad extendida de la pobreza, la desigualdad social y la exclusión, que generan un creciente distanciamiento entre la sociedad y las instituciones de la democracia representativa, que son percibidas como débiles y lejanas. Paralelamente, prevalecen importantes deficiencias por parte de los estados para responder a las demandas y expectativas de la población. En los últimos 20 años, el rango promedio de confianza del que han gozado las instituciones democráticas en América Latina (partidos, congreso y poder judicial) no supera los 4 de cada 10 latinoamericanos¹; la mayor parte de la población desconfía de todas estas instituciones todo el tiempo. En este contexto, la gobernabilidad democrática es puesta en tela de juicio, y continuamente cuestionada.

Si bien los latinoamericanos salen a emitir su voto, arraigado en el imaginario democrático contemporáneo, además del ciudadano que vota en las urnas, se encuentra el ideal de una ciudadanía activa y participativa que se involucre en los asuntos públicos y colabore en la conducción del gobierno. Sin embargo, en la actualidad la realidad es que existe una gran desconfianza y apatía en la democracia, por lo cual la población no siente interés en participar activamente en la vida pública de sus países.

En 2018, ocho países de la región tendrán elecciones, incluyendo a México quién celebrará las elecciones más grandes de su historia. En ese contexto, resulta fundamental llevar a cabo un análisis y discusión integral que aborde a cabalidad los temas que actualmente representan retos a sus democracias electorales. Así, si bien hace un par de décadas el desafío era establecer elecciones libres y competitivas, hoy el reto implica construir sociedades democráticas incluyentes, igualitarias y representativas a partir de un sistema electoral integral, moderno e inclusivo que sea la base del andamiaje institucional, ético y normativo de las democracias latinoamericanas.

¹ Latinobarómetro, "La confianza en América Latina 1995 – 2015, 20 años de opinión pública latinoamericana", Santiago de Chile.